

La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco

Sanciona con Fuerza de Ley Nro. 1096-J

(Antes Ley 4796)

Artículo 1º: Créase el “Programa Provincial de Asistencia a las Víctimas del Delito” que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo y estará integrado por un Equipo Interdisciplinario compuesto por personal de sus actuales estructuras, capacitado para la atención de las cuestiones psico-sociales, médicas y legales que correspondan.

El Programa Provincial constituirá “El centro de Atención a las Víctimas del Delito” que tendrá por objeto registrar a las víctimas y familiares de víctimas de delitos ocurridos en la provincia y denunciados dentro del plazo de diez días de producido el hecho, salvo situaciones de excepción debidamente fundadas.

Artículo 2º: A los efectos de la presente ley, se considera “Víctima del delito”:

- a) Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido: lesiones físicas, espirituales o mentales, padecimientos emocionales, que afecten su tranquilidad de vida, pérdida económica o afectación de sus derechos y atributos de cualquier naturaleza, como consecuencia de agresiones, acciones u omisiones de origen delictivos en su perjuicio, provenientes de terceros determinados o indeterminados; así como las personas que sufrieren daños materiales o inmateriales, gastos o disponibilidades por asistir a la víctima en peligro previniendo la victimización o por su asistencia posterior;
- b) El representante legal o tutor de la persona directamente afectada por el delito en caso de incapacidad, el cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como los herederos de la víctima en caso de su muerte;
- c) Las asociaciones reconocidas por el estado, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses.

Artículo 3º: Cuando la acción delictiva hubiere afectado el ámbito familiar, o fuere de aquellas llamadas “De Violencia Familiar”, la asistencia se efectuará a través del “Programa Provincial de Prevención y Asistencia a las Víctimas de la Violencia Familiar”, dispuesto por Ley 906-J (Antes Ley 4377).

Artículo 4º: “El Programa” creado por esta ley podrá prestar asistencia a requerimiento de:

- a) La víctima;
- b) Sus representantes legales;
- c) Organismos o funcionarios públicos competentes;
- d) Instituciones sociales y organismos no gubernamentales de acción comunitaria; con los cuales podrá establecer relaciones de colaboración para el cumplimiento de la tarea asignada por esta ley.

Artículo 5º: El “Programa Provincial de Asistencia a la Víctima del Delito”, tendrá por objeto:

- a) Acciones de prevención:
 - 1. Proponer políticas y formular proyectos, programas y acciones dirigidas específicamente a la prevención del delito, con el objeto de reducir la victimización y alentar la asistencia a las víctimas que la necesiten;
 - 2. Promover el interés de la familia chaqueña, de la comunidad educativa, de los organismos de seguridad, de los medios de comunicación y de la sociedad en general, sobre las necesidad de comportarse sin violencia y de comprender y atender con afecto y dedicación a las víctimas del delito;
 - 3. Promover los esfuerzos de la comunidad y la participación de la población en la prevención del delito, a través de campañas de difusión, concientización y sensibilización;

4. Fomentar programas de formación y educación a nivel de instituciones educativas;
5. Propiciar la capacitación del personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás interesados para la mejor atención de las necesidades de las víctimas y garantizar una ayuda apropiada y rápida;
6. Impulsar la revisión periódica de la legislación y prácticas vigentes y proponer normas para el mejor cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
7. Patrocinar las investigaciones prácticas de carácter cooperativo sobre los modos de reducir la victimización y ayudar a las víctimas, y promover intercambios de información sobre los medios más eficaces de alcanzar esos fines.

b) Acciones de asistencia:

1. Dar asistencia, información y asesoramiento integral a las "víctimas", cuando no puedan proveérselos asimismo, con los medios y recursos disponibles en los servicios del estado provincial, coordinados por el programa, facilitando el acceso a la justicia y la pronta reparación del daño sufrido, según la legislación vigente;
2. Brindar asesoramiento jurídico y patrocinio letrado en colaboración con los organismos públicos e instituciones sociales que trabajen en la problemática de la victimología;
3. Proveer la asistencia social necesaria y posible según el caso;
4. Asistir psicológica y socialmente a las familias de las víctimas o integrantes de las mismas, que requieran ayuda;
5. Propiciar adecuaciones de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas;
6. Formular propuestas institucionales, coordinar y realizar acciones que contribuyan a mejorar la situación de las víctimas del delito y demás destinatarios del programa.

c) Reconocer a la víctima los siguientes derechos:

1. A que se le reciba de inmediato la denuncia del delito que la afecta;
2. A recibir un trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
3. A que se respete su intimidad en la medida que no obstruya la investigación;
4. A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren en su interés, a través de los órganos competentes;
5. A ser asistida en forma especializada con el objeto de propender a su recuperación psíquica, física y social, durante el tiempo que indiquen los profesionales intervinientes;
6. A ser informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el procedimiento;
7. A que en las causas en que se investiguen delitos contra la propiedad, las pericias y diligencias sobre las cosas sustraídas sean realizadas con la mayor celeridad posible;
8. A intervenir como querellante o actor civil en el procedimiento penal, conforme con lo establecido por la garantía constitucional del debido proceso y las leyes de procedimiento locales;
9. A examinar documentos y actuaciones, y a ser informada verbalmente sobre el estado del proceso y la situación del imputado;
10. A aportar información y pruebas durante la investigación;
11. A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;

- 12.A ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada;
 - 13.A solicitar la revisión de la desestimación, el archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiera intervenido en el procedimiento como querellante;
 - 14.A que se adopten prontamente las medidas de coerción o cautelares que fueren procedentes para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;
 - 15.A que le sean reintegrados los bienes sustraídos con la mayor urgencia;
 - 16.Al sufragio de los gastos que demande el ejercicio de sus derechos, cuando por sus circunstancias personales se encontrare económicamente imposibilitada de solventarlos.
- Esta enumeración no es taxativa y no será entendida como negación de otros derechos no enumerados.

Artículo 6º: Cuando la víctima presente situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga, las autoridades deberán dispensarle atención especializada.

Se presumirá situación de especial vulnerabilidad en los siguientes casos:

- a) Si la víctima fuere menor de edad o mayor de setenta (70) años, o se tratare de una persona con discapacidad;
- b) Si existiere una relación de dependencia económica, afectiva, laboral o de subordinación entre la víctima y el supuesto autor del delito.

Artículo 7º: En los supuestos del apartado 4, del inciso c) del artículo 5º, se presumirá la existencia de peligro si se tratare de víctimas de los siguientes delitos:

- a) Delitos contra la vida;
- b) Delitos contra la integridad sexual;
- c) Delitos de terrorismo;
- d) Delitos cometidos por una asociación ilícita u organización criminal;
- e) Delitos contra la mujer, cometidos con violencia de género;
- f) Delitos de trata de personas.

Artículo 8º: Durante la ejecución de la pena la víctima tiene derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente, ante el juez de ejecución o juez competente, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a:

- a) Salidas transitorias;
- b) Régimen de semilibertad;
- c) Libertad Condicional;
- d) Prisión domiciliaria;
- e) Prisión discontinua o semidetención;
- f) Libertad asistida;
- g) Régimen preparatorio para su liberación.

El Tribunal a cargo del juicio, al momento del dictado de la sentencia condenatoria, deberá consultar a la víctima si desea ser informada acerca de los planteos referidos en el párrafo que antecede. En ese caso, la víctima deberá fijar un domicilio, podrá designar un representante legal, proponer peritos y establecer el modo en que se recibirá las comunicaciones.

Artículo 9º: En los casos referidos en el artículo anterior, si la gravedad del hecho que motivó la condena y las circunstancias del caso permitieran presumir peligro para la víctima, la autoridad de aplicación deberá adoptar las medidas precautorias necesarias para prevenirlo.

A efectos de evaluar la posibilidad de peligro se tendrá especialmente en cuenta lo establecido en los artículos 6° y 7° de esta ley.

Artículo 10: La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Gobierno, Justicia y Relaciones con la Comunidad.

Artículo 11: Regístrese y comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco, a los once días del mes de octubre del año dos mil.

Pablo L. D. BOSCH
SECRETARIO
CÁMARA DE DIPUTADOS

Eduardo Aníbal MORO
PRESIDENTE
CÁMARA DE DIPUTADOS

LEY N° 1096-J (Antes Ley 4796) TABLA DE ANTECEDENTES	
Artículo del Texto Definitivo	Fuente
1/4	Texto Original
5 inc. a) y b)	Texto Original
5 inc. c)	Ley 2904-J art. 1
6/9	Ley 2904-J art. 2
10/11	Ley 2904-J art. 3

Artículos suprimidos:
Anterior artículo 8° caduco por objeto cumplido.

LEY N° 1096-J (Antes Ley 4796) TABLA DE EQUIVALENCIAS		
Número de artículo del Texto Definitivo	Número de artículo del Texto de Referencia (Ley 4796)	Observaciones
1° / 7°	1° / 7°	
8°	9°	
9°	10	
10/11		Incorp. por el art. 3 de la ley 2904-J